

CAUSAS Y PERSPECTIVAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR

GUILLERMO M. UNGO

Estructuras injustas

La lucha en El Salvador tiene una larga historia con una causalidad fundamentalmente interna y un permanente actor externo, el gobierno de Estados Unidos, que recientemente se ha interiorizado en nuestra realidad nacional y en sus centros de poder. Gobiernos oligárquico-militares han sostenido estructuras injustas que excluyen a las mayorías populares de la participación real en las decisiones que afectan a la vida social, económica y política.

La democracia no sólo es un cruel y doloroso engaño; también es considerada subversiva y peligrosa. Todo planteamiento a favor del cambio social es, en consecuencia, objeto de persecución. La doctrina social de la Iglesia católica y de otras Iglesias, el ejercicio de los derechos sindicales y de la libertad de pensamiento, la crítica al gobierno, sirven al “comunismo internacional”.

Los resultados de esa concepción están a la vista: Iglesias perseguidas, sindicatos destruidos, periódicos y radios de oposición dinamitados y más de 40 000 salvadoreños asesinados desde 1980, en el más amplio muestrario de la actividad humana. Un arzobispo, más de una decena de sacerdotes, periodistas, maestros, profesores, estudiantes, profesionales, dirigentes políticos y, sobre todo, obreros y campesinos han sido eliminados. Por eso en El Salvador la democracia se escribe con sangre, exactamente como lo afirmaba en 1981 un periódico conservador colombiano de Medellín.

Violencia institucional

Los gobiernos de minorías y para minorías, haciendo mofa del concepto lincolniano de democracia, han tenido que apoyarse en la violencia institucionalizada, en el cierre de los canales de participación democrática, en la violación masiva y creciente de los derechos

humanos. Las mayorías desposeídas y los dirigentes políticos, sociales y religiosos tuvieron un dilema: callar y someterse, o luchar. De todas maneras la vida, los derechos humanos básicos y las libertades políticas son ilusión o riesgo temerario en El Salvador. El dilema es: pelear con riesgo de morir o no pelear con riesgo de morir a causa del hambre, de la miseria, de la represión política. Allí está la causa de la guerra actual.

La bandera del anticomunismo

El “anticomunismo” de la oligarquía y del ejército oligarquizado asesinó a 30 000 campesinos en 1932 y ahora cierra su ciclo con una matanza mayor. Ese anticomunismo siempre ha sido consentido y apoyado por los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Los oficiales del Ejército han sido entrenados por varias décadas en establecimientos militares de Estados Unidos y del Canal de Panamá para combatir al “enemigo interno” sobre la base de la nefasta teoría de la “seguridad nacional”. Visión y solución esencialmente militarista. Así, América Latina ha perdido cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos en nombre del anticomunismo, de la ley y el orden. Los Somoza, los Stroessner, los Pinochet solamente han traído muerte, desorden, inseguridad e inestabilidad en nuestro subcontinente. Los gobiernos de Estados Unidos han seguido la misma dialéctica de amigo-enemigo de nuestros dictadores; esa dialéctica que recientemente en San Salvador rechazó enérgicamente el papa Juan Pablo II y que confunde además amistad con sumisión. El epíteto de subversivo o comunista inmediatamente es aplicado a quien no se somete. Tenemos muchos años de conocer esa experiencia, aunque nuestras credenciales democráticas sean ampliamente conocidas.

A los dictadores anticomunistas, en cambio, no se les exige pluralismo ni elecciones, ni se les aplican sanciones, ni se les niegan créditos, ni se les ejecutan acciones encubiertas. Son amigos.

Reagan apoya a un gobierno asesino y corrupto

La guerra salvadoreña, a pesar de la desigualdad de condiciones entre ambas partes, no la está ganando el gobierno de El Salvador ni la administración Reagan. Se afirma que la ayuda enviada al gobierno salvadoreño por la administración norteamericana es modesta e insu-

ficiente. ¡Ya casi llega a los mil millones de dólares en tres años! en un pequeño país cuya población tiene un ingreso per cápita menor de 250 dólares al año y donde el gobierno destinó, en 1979, nueve dólares por persona a salud y 22 a educación; cada soldado salvadoreño le cuesta al contribuyente estadounidense 10 mil dólares y con las sumas adicionales requeridas al Congreso para éste y el próximo año, habría que agregar otros 10 mil dólares. Esa misma lógica también indica que combatir a grupos guerrilleros, que de acuerdo con las estimaciones del Pentágono no son superiores a los 7 mil combatientes, tiene un costo de más de 135 mil dólares por guerrillero.

El ejército popular resiste y avanza, no obstante la asistencia estadounidense

Ese ejército popular, en un pequeño territorio que no tiene condiciones geográficas favorables para la lucha guerrillera, sin grandes montañas, de fácil acceso a todos sus rincones, que no posee aviones, helicópteros, camiones, tanques ni artillería pesada, ha logrado no obstante resistir, desarrollarse y avanzar, combatiendo a un ejército poderoso y con gran capacidad de desplazamiento, que ahora dispone de más de 30 mil hombres, aviones, helicópteros, tanques y cuantioso equipamiento, entrenamiento y dirección militar norteamericana.

La explicación “ideológica” de quienes hacen política sólo con ideas anticomunistas y sin querer conocer las realidades, consiste en atribuir el éxito de las guerrillas a un factor externo y no interno, es decir, al apoyo de Cuba, Nicaragua, la Unión Soviética, etcétera. Esa explicación quiere ignorar muchas realidades internas y externas. El Salvador no tiene acceso directo a Cuba, Nicaragua ni la Unión Soviética; sus fronteras lindan con Guatemala y Honduras, que tienen gobiernos militaristas enemigos de las guerrillas y sometidos al gobierno de Estados Unidos. Desde 1980 el gobierno norteamericano está empeñado en controlar el flujo de armas, utilizando en Honduras, El Salvador y Nicaragua helicópteros, aviones de reconocimiento —incluidos A37-radar, espionaje, operaciones encubiertas, lanchas modernas y un destroyers en el golfo de Fonseca. Hasta ahora ninguna evidencia significativa de ese apoyo externo ha sido presentada. Todo ello revela que esa magnitud de recursos tecnológicos y humanos ha logrado evitar el flujo de armas o que este flujo no existe, o es ínfimo.

Wayne Smith, ex funcionario del Departamento de Estado, hace un tiempo expresó correctamente que de ser ciertas las afirmaciones

del caudal logístico externo de la guerrilla, ésta contaría con cientos de miles de hombres armados.

Dólares y armas contra un pueblo que lucha por justicia y paz

Los ideólogos conservadores creen que para ganar una guerra bastan los dólares y las armas. Aumentan su ayuda en dólares y armas y el Ejército del gobierno salvadoreño continúa fracasando y sufriendo mayores golpes y un deterioro militar y político creciente. La guerrilla ha recuperado de ese ejército más de 2 500 fusiles automáticos, así como municiones, pertrechos y armas de apoyo en importantes cantidades. Más de mil soldados se han entregado prisioneros al FMLN y han sido puestos en libertad por medio de la Cruz Roja Internacional. En cambio, el ejército no hace prisioneros.

Más importante aún, esa explicación "ideológica" quiere ignorar dos realidades humanas, no tecnológicas. Primera, el gran apoyo popular internacional que tiene nuestra causa, en todas partes del mundo, incluido Estados Unidos, donde sectores importantes del pueblo estadounidense han entendido mejor que su gobierno la situación de nuestro pueblo y las razones de su lucha política y armada. Son los pueblos y no los gobiernos los que nos dan activamente su solidaridad; incluso material, como dinero, medicinas, ropa, etcétera..

La otra realidad consiste en que esa guerra popular, en condiciones de inferioridad, únicamente puede sostenerse y avanzar con apoyo de la población. No hay que llamarse a engaño. Tenemos más del 10% de la población refugiada y desplazada, debido principalmente a las matanzas y represiones del Ejército. El desempleo es pavoroso, la inflación aumenta y el pueblo vive bajo el terror o el temor con la vida social y política militarizada. La gran mayoría vive bajo sospecha, repudiando al gobierno.

Ello significa que ese pueblo no puede expresarse públicamente, abiertamente, en las calles, fábricas y plazas, bajo riesgo de genocidio. Ya hemos conocido los resultados sangrientos que implica ejercer el derecho de reunión, hasta en los funerales del arzobispo Romero. Pero ese pueblo sostiene y alimenta la lucha en las más diversas formas, o espera su momento.

Eso explica por qué a pesar de las decenas de asesinatos diarios, apareciendo mes tras mes cadáveres mutilados con señales de torturas, no existe la paz de los cementerios. Quiere decir que la base social no está inactiva.

La guerra popular busca incorporar a la población a una democracia real

Una guerra popular por la que nosotros luchamos no es simplemente una de ejércitos que se confrontan el uno con el otro; comprende la incorporación de los más amplios sectores de la población en los diversos aspectos de la lucha política y militar.

Sucedió en Zimbawe en 1979, el pueblo de ese país tuvo que ir a votar (80%) a favor del obispo Muzorewa. Apenas 10 meses después se dispó la ilusión óptica del triunfo electoral de Muzorewa, quien sólo obtuvo el 8% de los votos.

En Polonia, después de la Ley Marcial ya no hubo movilizaciones masivas ni huelgas de 10 millones de trabajadores. Y en Polonia no han habido 40 000 personas asesinadas. Walessa no ha corrido la suerte de los dirigentes del FDR, que han sido secuestrados y asesinados después de sufrir infames torturas. La mejor prueba para el enfoque ideológico es responder a la siguiente pregunta: ¿qué sucedería al gobierno salvadoreño si Estados Unidos suspende el envío de ayuda militar? El propio gobierno salvadoreño y la administración Reagan han dado respuesta. Ellos no pueden permitirlo. La pregunta contraria sobre la supuesta ayuda cubana o soviética o nicaragüense a la guerrilla, ya la hemos respondido. No existe y no es necesaria. Basta con la solidaridad de grupos y fuerzas sociales y políticas de muchas partes del mundo. Sí hay dudas, por eso planteamos una solución negociada, con presencia de gobiernos u otra clase de testigos o mediadores internacionales de reconocida solvencia y amigos de Estados Unidos.

La solución política negociada sin injerencias extrañas

En la negociación se pueden discutir y convenir garantías de que sólo los salvadoreños, sin injerencias externas, resolveremos nuestro conflicto. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas, por dos años consecutivos ha aprobado resoluciones pidiendo el cese de la ayuda militar a las partes contendientes. No acceder a ello es prolongar, profundizar y regionalizar la guerra, en la que los salvadoreños ponemos los muertos. Es innegable la responsabilidad del gobierno del presidente Reagan en la prolongación, profundización y regionalización de la guerra, que contrasta con la posición del Grupo de Contadora, que tiene apoyo mayoritario latinoamericano,

rechazando la estrategia de pacificación por medio de una guerra de exterminio, con adornos electorales.

En los círculos del poder político de Estados Unidos se afirma que si se termina la ayuda militar al gobierno salvadoreño, éste se desploma y El Salvador cae en manos del comunismo. Por consiguiente, como somos el “patio trasero” o el “jardín delantero” de Estados Unidos, hay que incrementar la guerra y la matanza para “salvarnos”. Mentalidad propia de la inquisición, cuando se quemaba a los herejes y a los sospechosos de serlo.

Ese juicio denota una concepción primitiva anticomunista y de naturaleza imperialista que destruye las bases de la convivencia internacional, que descansa en el respeto del pluralismo político entre los Estados y del derecho de autodeterminación y de no intervención. Con ese criterio son justificables las operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar o derrocar a un gobierno extranjero, lo que constituye verdaderos actos de guerra, de intervención y de vocación insolente de dominio. Ese juicio, además, es un reconocimiento implícito de que el gobierno salvadoreño está perdiendo la guerra, a pesar de que la ayuda estadounidense aumenta en proporción geométrica. Pero, sobre todo, ese juicio construye una perspectiva política para El Salvador totalmente ideologizada, sin asiento en la realidad.

Pluralismo político en El Salvador

Esa realidad se refiere a las posibilidades del pluralismo político en El Salvador. Ese pluralismo no existe ahora ni ha existido antes en mi patria. Cuesta la vida, la cárcel, el exilio o el silencio estar en contra del gobierno o de la oligarquía. La verdad es que el pluralismo tiene una dimensión ideológica, otra política y otra sociológica, vinculadas entre sí. La primera se refiere a una parte inherente de la *concepción* democrática, la segunda a una *realidad* democrática y la tercera a una *posibilidad* democrática.

En El Salvador existe como dato real, sociológico, una pluralidad de organizaciones políticas de distinto signo, dentro del gobierno y en el FDR-FMLN. Son fuerzas políticas y sociales reales, organizadas, con base social diversa, que se han desarrollado no obstante la represión que han sufrido muchas de ellas. Eso quiere decir que hay posibilidades de construir el pluralismo político en El Salvador por medio de una negociación. Una victoria militar de cualquiera de los bandos en pugna limita y reduce esas posibilidades.

*Un nuevo poder legitimado por el consenso nacional
y el apoyo popular*

La realidad también nos enseña que son varios los factores del poder político y no solamente el poder de las armas. La legitimidad de un régimen, el consenso nacional y el apoyo popular, son los principales factores de poder. El poder de las armas, cuando es ilegítimo, ni sirve a la seguridad nacional ni a la seguridad hemisférica, ni asegura estabilidad y paz. La crisis salvadoreña, en toda su agudización, tiene más de diez años, y el poder armado del Ejército no ha hecho más que agravarla. Argentina nos está dando un buen ejemplo de ello.

En el FDR-FMLN tenemos más de tres años de alianza, que ha significado un ejemplo concreto y práctico de pluralismo y de práctica de democracia interna entre nosotros; de discusiones y acuerdos. De modo que la pregunta de quién controla a quién es impertinente.

La realidad enseña que se ha avanzado en entendimiento y en coordinación, no únicamente en el campo militar sino en el terreno de programas, posiciones e iniciativas políticas, particularmente referidas a los aspectos del diálogo y la negociación.

Deseamos amigos y no amos en el contexto internacional

Tampoco es posible tener una concepción autárquica del poder político, desligado del contexto internacional. No somos Europa del Este, sino parte del hemisferio americano. Nuestro gran vecino no es la Unión Soviética, sino la otra superpotencia, Estados Unidos. Deseamos y necesitamos tener y mantener relaciones dignas y de colaboración con nuestro gran vecino por razones de supervivencia.

Conocemos muy bien lo que significa conquistar y desarrollar un proyecto nacional en contra de la oligarquía; será una locura agregar un impedimento total, confrontando a la primera superpotencia del mundo.

Finalmente, sobre este aspecto es preciso destacar que nuestra lucha ha recibido la más profunda y amplia solidaridad internacional, plural y diversa. Del mundo capitalista y del mundo socialista; de Cuba, Nicaragua, México, Francia, Suecia, Grecia y muchos otros países europeos, latinoamericanos y del Tercer Mundo. No se trata de un proyecto social demócrata porque nos apoye la Internacional Socialista, ni de un proyecto comunista porque nos apoye Cuba. Esa

solidaridad pluralista es garantía de nuestra posición nacionalista y de no alineamiento.

Comprendemos muy bien que para reconstruir a nuestro país vamos a requerir de la más diversa y pluralista ayuda, principalmente del mundo occidental. Nuestro no alineamiento es, en consecuencia, una posición de principios, de necesidades y de conveniencia política.

Deseamos tener amigos, no enemigos ni amos.

Reagan, El Salvador y la seguridad hemisférica

El presidente Reagan expone que Estados Unidos tiene que cuidar de su seguridad nacional. Estamos de acuerdo, pero disentimos de su manera de considerar los intereses que afectan a la seguridad nacional y sobre todo de la forma en que ejecuta su política a ese respecto. Él está más bien poniendo en peligro la seguridad hemisférica y, en consecuencia, la seguridad de su propia nación.

Por esas razones siempre hemos estado en disposición de dialogar con el gobierno de Estados Unidos, para discutir y convenir sobre puntos concretos que involucran nuestra mutua seguridad nacional. No se trata de un debate ideológico sino de un acuerdo político, demostrando nuestra posición neutral e independiente en aspectos como: no instalación de bases y facilidades militares de otros gobiernos, fuentes y niveles apropiados de equipamiento militar de un futuro gobierno, seguridad para rutas marítimas de tránsito y no alianzas militares. Desde ya aseguramos que no pretendemos ser un factor de guerra fría y de confrontación, pues no queremos contribuir a la bipolaridad del mundo.

Dignidad y respeto mediante el diálogo

Estamos seguros de que todos esos puntos pueden ser resueltos en un plano de dignidad y respeto mediante el diálogo con la administración del presidente Reagan. Ésa es una manera práctica y eficaz de ponernos mutuamente a prueba ante la comunidad internacional.

Contrario a la concepción de la administración Reagan, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos, europeos y del resto del mundo opinan que debe cesar la injerencia militar externa en El Salvador y que es urgente abrir las puertas a un diálogo que conduzca a una solución negociada del conflicto.

La ayuda militar estadounidense fortalece a los sectores guerreristas que se oponen al diálogo y que quieren “democratizar” el país exterminando a la oposición. El proyecto estadounidense tiene una contradicción irresoluble; es el proyecto del populismo imposible, de un gobierno “centrista” y “reformista” donde los socios mayores son de la derecha militar, política y económica; en síntesis, los altos mandos militares y la oligarquía. El ingeniero Napoleón Duarte ha declarado repetidamente que existe un vacío de poder en el actual régimen. Eso no es exacto, más bien se trata de una crisis de poder; sin embargo, implica un reconocimiento de que los partidos en el gobierno, el sector político civil casi no cuenta.

Diálogo y negociación con sectores democráticos antioligárquicos

Dentro del gobierno existen sectores políticos y militares debilitados pero importantes que se inclinan al diálogo y a la negociación como la única alternativa viable. No se atreven a cruzar el puente porque están bajo el temor y la acción de los dos factores que se oponen a ello: la extrema derecha y la administración Reagan. Nosotros creemos que es posible y urgente construir un consenso nacional por medio del diálogo. Desde principios de la década de los años setenta hay una conciencia nacional por conquistar la democracia mediante cambios en la estructura oligárquica del país. No es gratuito afirmar que ese consenso nacional antioligárquico y democrático tiene posibilidades de concreción con el FDR y el FMLN, con sectores del gobierno y otras fuerzas sociales y económicas que no han optado entre las partes contendientes.

Se insiste en el pluralismo y se cierran las puertas a la negociación, que es el mejor instrumento para garantizarlo. Reiteradamente se ha utilizado el argumento de que el FDR y el FMLN no tienen derecho a negociar “compartir el poder”, porque pretenden obtener por medio de las balas lo que no pueden alcanzar por medio de los votos. Esas argumentaciones son falsas y farisaicas.

Compartir el poder, primer paso hacia las elecciones verdaderamente libres

En primer lugar, porque ya hay antecedentes de compartir poder. En octubre de 1979, los comunistas, los demócrata-cristianos y los

socialdemócratas ingresaron al gobierno, con la aceptación formal del gobierno de Estados Unidos. A principios de 1980, los demócrata-cristianos justificaron públicamente su pacto con el Ejército sobre la base de iniciar un diálogo amplio con todas las organizaciones políticas de izquierda para llegar a construir un gobierno de amplia participación.

En segundo lugar, quien no quiere compartir el poder tampoco está dispuesto a dar elecciones libres y democráticas, y menos a aceptar sus resultados. Es obvio también que nuestros frentes tienen una amplia base popular; se puede discutir su mayor o menor representatividad, pero no negar que expresan una parte importante del poder que emana del pueblo.

En tercer lugar, se parte de la premisa de que existe un gobierno democrático en El Salvador, resultado de elecciones libres. Eso es falso. El propio pueblo jamás eligió al presidente Álvaro Magaña, quien resultó escogido por maniobras palaciegas entre el Alto Mando militar y el embajador de Estados Unidos. Fueron elecciones sin participación nuestra, en virtud de que las propias Fuerzas Armadas, supuestamente neutrales y obligadas a garantizar la imparcialidad y pureza electoral, públicamente nos declararon subversivos, terroristas y sujetos de persecución. Un gobierno que viola masivamente los derechos humanos, en escala genocida, no puede llamarse democrático. Somozas también celebraba eventos electorales y nuestra experiencia histórica es abundante en este tipo de elecciones. No olvidemos que el voto es compulsorio en El Salvador y que el régimen lanzó toda su propaganda acusando de subversivos a los que no votaran.

Negociaciones y elecciones, base firme de la solución política

La verdad es que nosotros y nuestro pueblo sí queremos elecciones libres; pero para ello no basta con garantizar la seguridad de los dirigentes políticos ni de los militantes, sino de todo el pueblo, para que participe sin temor en una campaña electoral. Para ello se necesita que desaparezcan los escuadrones de la muerte, que haya paz, se respeten los derechos humanos y se puedan ejercer los derechos políticos y sindicales. En fin, todo ello significa una solución política negociada que modifique la actual estructura represiva de poder.

En enero de 1982, el entonces presidente de México, José López Portillo, en un mensaje dirigido desde Managua situó cabalmente el problema, al rechazar el falso dilema de negociación sin elecciones o elecciones sin negociación.

Para llegar a un proceso negociador es imprescindible comenzar por un diálogo sin condiciones previas. Poner condiciones es un mero recurso para no sentarse en una mesa de diálogo.

Nuestra posición no es la de dialogar por dialogar, únicamente para ganar tiempo. No es necesario, pues la administración Reagan nos está concediendo ese tiempo al rechazar las negociaciones.

Los seis puntos de la negociación

Consideramos que en un proceso negociador hay seis puntos fundamentales que tienen que ser resueltos: acuerdos sobre reformas profundas que conduzcan a un progreso económico y social; posición internacional de no alineamiento; cese de fuego; composición de gobierno provisional; reestructuración del ejército, y elecciones.

Esos seis puntos están estrechamente vinculados. Negociar condiciones de participación electoral forzosamente nos lleva al problema de la estructura represiva de poder, a los cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte, a las violaciones de los derechos humanos, al acceso a los medios de comunicación y a la libertad de reunión.

Como recientemente escribió Eldon Kenworthy, quien enseña política Latinoamericana en la Universidad de Cornelle (en *These-Times*, 4 de mayo de 1983): “El presidente [Reagan] habla acerca de elecciones en El Salvador como si se celebraran en Estados Unidos donde los civiles controlan a los militares. La izquierda salvadoreña, por supuesto, conoce solamente acerca de su propia realidad.”

Yo fui miembro de la Primera Junta Cívico-Militar de octubre de 1979 a enero de 1980; eso significa que yo era formalmente un jefe del ejército. Yo no puedo engañarme a mí mismo acerca de tal experiencia, que me enseñó que la palabra final la decían los militares.

Ni la primera superpotencia del mundo ha podido obtener el castigo de los asesinos de las monjas y de los asesores agrarios estadounidenses, no obstante el billón de dólares entregados al gobierno salvadoreño. ¿Qué podemos pensar sobre la impunidad de los que asesinaron al arzobispo Oscar Arnulfo Romero, a los dirigentes del FDR, incluido su anterior presidente, Enrique Álvarez, y a más de 40 000 salvadoreños? Sólo una respuesta se impone: ellos están en el gobierno, ellos están en el poder. Ellos son responsables de la represión y el alzamiento mismo de las masas. Ellos operan en un esquema de terror, muerte y persecución contra el pueblo.

Sólo hay dos caminos: la guerra o la negociación política

En ese esquema de violencia estructural, abuso del poder militar, fraude y corrupción en el gobierno, la guerra popular no sólo es legítima, sino ética. El Salvador quiere ser libre, soberano, independiente. Y para lograrlo sólo hay dos caminos: pelear con las armas en la mano hasta la victoria final, o negociar con sectores sociales representativos un nuevo orden económico y político que asegure la libertad, la justicia, la democracia y la paz dentro de un régimen de amplia participación nacional.